

Bolivia 2006: Un año de gobierno de Evo Morales

Fabián Bosoer y Héctor Rubini

Escenario actual

No se exagera al señalar que la experiencia que está viviendo Bolivia, en este primer año de agitada gestión del presidente Evo Morales, no tiene precedentes históricos contemporáneos ni ejemplos comparables en América Latina e inclusive en el mundo en la actualidad.

Esta singularidad se explica por el hecho de que se trata de un país que, con los más altos índices de pobreza y desigualdad social de la región sudamericana y con las mayores reservas gasíferas del subcontinente, está enfrentando de manera simultánea una reformulación de su organización político-institucional, de su sistema de gobierno y de su sistema socio-económico. Ello supone una redefinición radical de las relaciones entre el Estado y la sociedad y de su representación e identidad como Nación; en otros términos, una verdadera revolución política, económica y cultural.

A esta caracterización debe agregarse que la vigencia de las instituciones democráticas aparece como un valor adquirido y una condición irrenunciable de esta transformación, tanto por parte de los actores que la impulsan, representados por el Movimiento al Socialismo (MAS) en el gobierno, como de los sectores sociales y políticos que la resisten, se oponen o critican sus políticas. Al mismo tiempo, plantea escenarios confrontativos que amenazan con una ruptura de las reglas de juego y una interrupción de los procesos de resolución pacífica y negociada de los conflictos; situación que se inscribe en una historia de permanente

inestabilidad política y convulsiones sociales pero también en el aprendizaje más reciente de auto-transformación institucional y regeneración política que ha vivido este país en el marco de la crisis y agotamiento de su modelo estatal dominante en el último medio siglo.

Ello permite situar a la experiencia boliviana en una encrucijada histórica especial e inscribirla en las tensiones actuales entre la democracia representativa y las formas deliberativas de participación democrática y organización social; así como también en los debates entre el liberalismo y el socialismo, el comunitarismo y el republicanismo cívico. La especial relación entre ciudadanía y multiculturalidad que plantean los postulados indigenistas es, a su vez, otro de los factores distintivos del proceso político boliviano.

Con este trasfondo, la evolución de los conflictos políticos y sociales y de la gobernabilidad democrática en estos primeros doce meses de gestión del primer presidente boliviano de origen indígena, permite distinguir fortalezas y debilidades, oportunidades y riesgos, en procesos en marcha que se desarrollan en cuatro escenarios institucionales y otros dos de tipo extra-institucional:

- a. *Actores y escenarios institucionales*
 - a.1. Relación Gobierno-empresas de hidrocarburos, tras la nacionalización y renegociación de contratos de gas y petróleo. En este nivel, inciden también de manera directa las relaciones exteriores con los principales

"...Desde el año 2000, Bolivia viene experimentando el creciente protagonismo de los movimientos sociales, un ascenso que es correlativo al derrumbe de los partidos y movimientos que dominaron la política boliviana del último medio siglo, sin contar la recurrente irrupción de las fuerzas armadas en la misma..."

gobiernos de países involucrados en el tema: Brasil, Argentina, España y Venezuela. Y, como factor condicionante, el manejo de los vínculos con los EE.UU.

- a.2. Relación Gobierno-Congreso, en la ciudad de La Paz, en la discusión legislativa de las reformas impulsadas por el oficialismo. El MAS dispone de mayoría en la Cámara de Diputados, 72 sobre un total de 130; pero en el Senado no cuenta con mayoría propia: sobre 27, son 12 senadores oficialistas, 13 del Poder Democrático y Social (PODEMOS), 1 del MNR y 1 de Unión Nacional.
 - a.3. Relación Gobierno-Asamblea Constituyente, con sede en la ciudad de Sucre, en otro plano de la confrontación entre el MAS y las fuerzas de la oposición. La composición original de la Asamblea de 255 constituyentes es: 137 asambleístas del MAS, 60 de PODEMOS, 18 del MNR y 8 de la UN.
 - a.4. Relación Gobierno central-gobiernos provinciales, mayoritariamente en manos de la oposición, un tercer plano de disputas en el que está en juego el modelo de organización política e integración nacional. Son seis de los nueve departamentos (Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija, La Paz y Cochabamba) donde vive el 80% de la población los que tienen prefectos que confrontan con el gobierno nacional.
- b. Actores y escenarios extra-institucionales*
- b.1. Protestas sociales, empresarias y gremiales referidas a demandas sectoriales y reclamos específicos. El Gobierno enfrenta demandas cruzadas de trabajadores, empleados públicos, organizaciones campesinas e indígenas en reclamo de mejoras y reformas prometidas, y de productores agropecuarios, grupos empresarios, cámaras de comercio y movimientos de terratenientes que resisten las políticas y medidas consideradas “expropiatorias”.
 - b.2. Movimientos reivindicativos relacionados con el factor territorial y las autonomías y autonomismos regionales liderados por el Comité Cívico de Santa Cruz. El frente de conflicto articula en este plano las distintas cuestiones en discusión con divisiones más profundas de raíz histórica, socio-económica y de identidad entre las elites de ascendencia europea y las poblaciones indígenas y mestizas mayoritarias, en las regiones de Oriente y Occidente del país respectivamente.

En un balance preliminar, puede señalarse que el presidente Morales ha mantenido la iniciativa política, a lo largo de sus primeros meses de gobierno, haciendo valer el enorme capital de respaldo que le otorga su incuestionable legitimidad de origen. Con un régimen presidencialista y una Constitución republicana que por primera vez lleva veinticuatro años de vigencia ininterrumpida, Evo Morales es el primer presidente elegido por una contundente mayoría en las urnas, con un 53% de los votos. Este respaldo y su reivindicación del legado histórico de la población indígena originaria, largamente postergada y excluida del poder, le ha permitido avanzar en frentes simultáneos sobre sus objetivos fundamentales: la recuperación de la capacidad estatal en el control de los recursos estratégicos, la convocatoria a la Asamblea Constituyente para una reforma constitucional y la aprobación de reformas en el régimen de propiedad y tenencia de las tierras en el Congreso.

Sin embargo, la estrategia del gobierno del MAS ha encontrado límites infranqueables en el propio formato institucional, en su dificultad para sumar fuerzas más allá del diverso y heterogéneo conglomerado que representa y en la necesidad de contar con algún tipo de acuerdo de garantías nacional que evite el ciclo de inestabilidad, polarización e ingobernabilidad que lo tuvo, en el pasado, como un principal protagonista. Morales y sus hombres de confianza no desconocen las dinámicas de conflicto ya que se forjaron en ellas como dirigentes sociales y líderes políticos. Pero deben enfrentarlas ahora como gobernantes y ello implica capacidad para encauzar las demostraciones reivindicativas, conciliar intereses y alcanzar acuerdos que les permitan llevar adelante su gestión y cumplir, al mismo tiempo, con las promesas de refundación nacional y reivindicación de los pueblos autóctonos, sometidos a lo largo de su historia.

Marco general

Bolivia ha recobrado su rol central como abastecedor de hidrocarburos en el Cono Sur a partir de la crisis macroeconómica de Argentina de diciembre 2001-julio de 2002. Ya en 1997 se contaba con evidencia que mostraba a Bolivia como el país con mayores reservas de gas en Sudamérica (36% de un total de 151,9 millones de metros cúbicos). Al año 2004 el negocio energético generaba en Bolivia una facturación aproximada de U\$S 860 millones en la explotación de gas natural, U\$S 106 millones por gas licuado de petróleo y U\$S 460 millones por la producción de derivados del petróleo.

La caída del nivel de actividad y del nivel de vida entre 1999 y 2003 exacerbó la conflictividad social y la resistencia a políticas de ajuste basadas en la liberalización de los mercados y contratos con firmas extranjeras para explotar los recursos gasíferos. En el 2004, Bolivia exportaba 30 millones de m³ de gas a Brasil y Argentina, y se presentó a la opinión pública la discusión de dos proyectos polémicos. Uno era la construcción de una red de gasoductos hacia Brasil y Argentina que eventualmente podía beneficiar a Chile, pero en ese año se reavivó la disputa de Bolivia contra Chile por la salida al mar de Bolivia. El otro proyecto, más conflictivo, consistía en uno del consorcio integrado por Repsol YPF, Panamerican Energy para construir una planta productora de gas licuado sobre la costa, en el puerto de Ilo (Perú) o en el de Patillos (Chile), a efectos de exportarlo a México y EEUU (y eventualmente a Perú y Chile).

La discusión de este proyecto desató una polémica con Chile por la salida hacia el mar. Otra controversia fue motivada por la apropiación del excedente generado por las exportaciones de gas y otros derivados. A fines de 2003, aparentemente el panorama mostraba a dicho sector controlado por firmas extranjeras que se habían beneficiado de los bajos costos operativos, y de la suba de los precios internos acorde al ascenso de los internacionales, que vienen en alza desde 2001.

Luego de las movilizaciones que terminaron con la expulsión del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada en octubre de 2003, se precipitó una nueva crisis política para su sucesor, Carlos Mesa por un proyecto de ley de hidrocarburos que aseguraba al Estado ingresos anuales por U\$S 151 millones. El mismo enfrentó los proyectos alternativos del presidente de la Cámara de Diputados (que aparentemente aseguraba ingresos al Estado por más de U\$S 500 millones anuales), y otro apoyado por el ascendente Movimiento al Socialismo, que estimaba una renta asegurada entre U\$S 700 y U\$S 750 millones. En julio de 2004, un referéndum convocado por el gobierno zanjó transitoriamente el tema.

Una nueva ola de protestas aceleró el proceso de traspaso del poder. La renuncia de Mesa, en junio de 2005, sucedido por el titular de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Rodríguez y el anuncio de una reforma constitucional permitieron despejar la transición hacia una desembocadura de elecciones legislativas y presidenciales, y en diciembre de 2005 se impuso por más del 50% de los votos el candidato del Movimiento al Socialismo, Evo Morales, primer presidente indígena en la historia del país, quien asume el 22 de enero de 2006.

El oficialismo cuenta con mayoría absoluta en la Cámara Baja y alianzas en el Senado, lo que muestra una fortaleza política notablemente superior a los gobiernos previos de los últimos 10-15 años. El referéndum por las autonomías regionales del pasado 2 de julio consagró, al mismo tiempo, a nuevos gobernadores que, en su mayoría, son opositores al gobierno nacional. En dichos comicios también se eligieron representantes para la Asamblea Constituyente que desde agosto tiene mandato para reformar la Carta Magna y es otro de los epicentros del conflicto boliviano. La reforma constitucional contempla cambios fundamentales en relación al rol del Estado, los derechos de propiedad y la tenencia de la tierra; pero el principal desacuerdo se ha planteado en los criterios de determinación de las mayorías necesarias para aprobar las nuevas normas.

El Gobierno sostiene un programa económico con fuerte intervención del Estado. La política en curso se enmarca en un Plan Nacional de Desarrollo hasta el 2011, en que se prevé un crecimiento real promedio anual del PBI del 6,3%, una reducción del índice de pobreza en 9 puntos (hasta el 50%) y una drástica caída de la tasa de desempleo, hasta el 4%. Dicho Plan apunta hacia la recuperación del control estatal de las empresas privatizadas en la década pasada en las áreas de hidrocarburos, telecomunicaciones, electricidad y provisión de agua potable (no se incluiría la estatización de la aerolínea privatizada). También se implementaría una radical reforma del Estado que incluye la eliminación de agencias regulatorias (salvo la superintendencia de bancos).

Si bien el país aún depende del financiamiento externo, la fuerte suba de ingresos por exportaciones de hidrocarburos puede marcar una reversión de dicha situación a partir del año próximo. Igualmente, sigue siendo una de las economías más pobres América Latina, con el 64% de su población bajo la línea de pobreza, y una marcada inequidad distributiva. Otros problemas heredados son los siguientes:

- a) exacerbado conflicto económico-político-racial entre la población andina y del altiplano (quechua, aymara y mestiza) y la de la región de los llanos del este (zona de Santa Cruz de la Sierra y áreas cercanas a Brasil y Paraguay),
- b) la extrema pobreza, y el creciente descontento popular ante la falta de acciones concretas para revertirla desde hace décadas, sumado a la muy desigual distribución de la renta,

- c) la amenazas sobre la población rural que representan la rápida desertificación resultado de la deforestación descontrolada, la erosión del suelo por métodos de cultivo no conservacionistas y el sobrepastoreo,
- d) creciente contaminación del agua en varias áreas del país,
- e) aumento de áreas cultivadas con coca. Bolivia es el tercer productor mundial, después de Colombia y Perú. Según información pública de la CIA, se exporta pasta base y cocaína hacia Brasil, Argentina, Chile y la Unión Europea,
- f) lavado de dinero, hasta el presente sin controles efectivos.

La coyuntura económica

Los indicadores macroeconómicos muestran un escenario de razonable estabilidad. En el año 2005 el PBI creció más de un 4% y el déficit fiscal quedó controlado en apenas 2,3% del PBI. La inflación se ha mantenido por debajo del 5%, a pesar de la inflación de costos impulsada por la suba del precio del petróleo y derivados. El FMI en su misión de julio de 2006 reconoció que el sistema financiero muestra un aumento del stock de depósitos y de créditos por primera vez en varios años, y cierta reducción de la tradicional dolarización financiera de Bolivia. Igualmente el sistema no muestra indicadores de alta rentabilidad, y sigue siendo vulnerable a los flujos de capitales especulativos de corto plazo.

La recuperación desde 2001 hasta el año 2004 no fue simétrica. Se concentró fundamentalmente en las áreas hidrocarburíferas de la franja de Tarija y en los valles de Chuquisaca y Cochabamba. El resto del país ha mostrado, en cambio, una fuerte baja en el nivel de actividad. Desde 2005 la actividad económica se ha venido recuperando gracias a los precios de los hidrocarburos exportados. Las divisas que ingresan por tal concepto se vienen reinvertiendo fuertemente en la construcción residencial. Para el presente año se espera un crecimiento del PBI del 4,5%, mientras que para la construcción las proyecciones disponibles coinciden en señalar una expansión del 16%.

El motor del crecimiento es la producción y exportación de gas natural. Los ingresos de divisas por ese concepto este año superarían el 10,5% del PBI, y en el año próximo alcanzarían al 14% del PBI, representando más de la mitad de los ingresos por exportaciones. En este año las cuentas fiscales

cerrarían con un superávit fiscal probablemente superior al 4% del PBI, gracias a los favorables precios de los hidrocarburos, el aumento de las exportaciones de minerales, y de la producción agropecuaria. En un año la recaudación tributaria ha aumentado más del 46%, y se redujo la carga de la deuda externa. Ya en 2005 los países del G-8 anunciaron un plan de condonación de la deuda boliviana por U\$S 2.000 millones, y entre diciembre de 2005 y septiembre de 2006 la deuda externa de Bolivia ha descendido de U\$S 4.941 millones a U\$S 3.206 millones gracias a la condonación de U\$S 1.511 millones por parte del Banco Mundial y de otros U\$S 232,5 millones por parte del FMI.

Los números fiscales permiten prever que en el primer semestre del año próximo Bolivia podría salir de la lista de países más endeudados del mundo que requieren un plan específico para naciones pobres altamente endeudadas. Por otro lado la actual administración se encuentra negociando con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) la condonación de un pasivo de U\$S 1.600 millones.

El gobierno de Morales ha impulsado una drástica reforma tributaria que comprende la eliminación de exenciones impositivas, reformas a la legislación de zonas francas, eliminación de regímenes especiales (como para el sector del transporte), y una reforma al tratamiento tributario de los juegos de azar. También se ha considerado la eliminación del impuesto a las transacciones financieras sobre depósitos en moneda local, pero su preservación para los depósitos en dólares por montos superiores a los U\$S 2.000, y reformas al tratamiento tributario para las actividades mineras y una reducción de la edad mínima para la jubilación (55 años para los hombres y 50 para las mujeres, en lugar de 65 para ambos, como es el régimen heredado). La Ley de Hidrocarburos del año 2005 ya contemplaba una modificación en la distribución por coparticipación del impuesto a los combustibles, reduciendo la participación de la Administración Central sobre dicha masa de ingresos del 55% al 35%.

Con respecto al gasto público, el presidente Morales dispuso desde el inicio de su gestión una reducción en más de un 50% de su salario, y una fuerte baja de salarios en el sector público. Si bien la suba de los precios de los hidrocarburos permite gozar de una creciente recaudación tributaria, persisten tres fuentes relevantes de aumento del gasto público:

- 1) incrementos salariales para trabajadores de la salud y de la educación,

- 2) aumento en los subsidios para importaciones de gas oil a precios inferiores a los internacionales,
- 3) aumento en los gastos por obras públicas de los gobiernos subnacionales.

El objetivo de promover el empleo y la equidad se estaría logrando con avances concretos en el presente año. Sin embargo, aun cuando las autoridades publican datos estadísticos que muestran un descenso de la tasa de desocupación abierta del 8,15% (año 2005) al 7,6%, las organizaciones indígenas y ONGs independientes sugieren que la cifra verdadera puede ser aun mayor. Huelgas y protestas de los gremios docentes y sindicatos de transportes, al cabo de los primeros siete meses de gobierno, empiezan a demarcar los márgenes de maniobra en los que se debe mover el presidente Morales para llevar adelante su programa de reformas. A ello se suman conflictos y enfrentamientos entre trabajadores de la empresa minera estatal, la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y mineros “autónomos” que reclaman una mayor participación en los yacimientos de estaño.

El rol de los hidrocarburos

El sector gasífero es la columna vertebral de la economía boliviana. Si bien las exportaciones de poroto de soja ya representan el 10% de las exportaciones, no se observa el desarrollo de otras ramas de actividad con potencial competitivo y que permitan a Bolivia reducir su dependencia de las exportaciones de gas (altamente concentradas en el mercado brasileño).

El decreto presidencial el 1º de mayo pasado fijó inicialmente un plazo de seis meses para que las empresas extranjeras de hidrocarburos y el Gobierno renegociaran los términos de los contratos de concesión incluyendo compensaciones por la nacionalización de activos. Dicho decreto dejó sin efecto el proceso de “capitalización” o privatización de 1996 iniciando un proceso de renacionalización del sector. En 1996 se habían privatizado 10 empresas públicas, incluyendo las de hidrocarburos, a cambio de compromisos de inversiones. El 49% de los fondos obtenidos se destinó a un Fondo de Capitalización Colectiva (FCC) administrado por fondos privados de pensiones.

Las autoridades entienden que dicho proceso ha estado viciado desde su origen, que el grueso de las ganancias posteriores del sector de hidrocarburos fue transferido a las casas matrices de las empresas extranjeras, y que los contratos con las firmas pri-

vadas extranjeras nunca fueron ratificados por el Poder Legislativo, según lo exige la Constitución. Igualmente, la realidad muestra que entre 1997 y 2004, las empresas extranjeras (British Gas, Total, Repsol YPF y Petrobrás) invirtieron casi U\$S 5.000 millones en explotación, refinación y transporte de gas. El decreto del 1º de mayo de este año ordenó el retorno de las empresas de hidrocarburos al control del Estado, y la devolución al Gobierno boliviano de las acciones del FCC y la entrega al Gobierno de la administración de ese Fondo. El proceso prevé la compra por parte del Estado de las acciones de firmas hidrocarburíferas y del FCC en manos de particulares. Adicionalmente, dicho Decreto estableció lo siguiente:

- a) el Estado debe realizar una auditoría de las firmas privatizadas para determinar su estructura de costos, rentabilidad y cumplimiento de los compromisos de inversiones,
- b) la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) debe recuperar el control de las firmas gasíferas Chaco y Andina, y del gasoducto Transredes, y adquirir la mayoría accionaria en dos refinerías de petróleo de propiedad de la brasileña Petrobrás, y de una empresa de logística cuyo propietario es un consorcio peruano-alemán.

Gracias a estas iniciativas, y con el acordado aumento del precio del gas exportado a la Argentina, Bolivia obtendría este año U\$S 1.200 millones por exportaciones de gas, superando ampliamente los ingresos del año pasado (U\$S 539 millones)¹.

La política del MAS

El tipo de reformas promovidas por el Gobierno probablemente se comprenda mejor si se contemplan algunas cifras que revelan la herencia recibida por el presidente Evo Morales:

- a) con una población de 9,4 millones de personas, existen 6 millones de pobres, y sobre ese subtotal, 4 millones sobreviven con menos de U\$S 1 por día,
- b) el 86% de la población se encuentra en una situación de pobreza, y sobre este segmento, el 95% se encuentra en la extrema pobreza, y el 90% en la indigencia,
- c) el 90% de las tierras productivas del país está en manos de menos de 200 familias. En otras cifras, el 80% de las tierras está controlado por el 10% de la población.

La nueva administración se ha propuesto realizar un cambio estructural, con un efectivo control del poder, subordinando a los grupos económicos más poderosos al Estado con medidas concretas para revertir la herencia recibida:

- a) rebaja de sueldos en el Estado,
- b) reforma del sector público,
- c) convocatoria a una Asamblea Constituyente, que inició sus sesiones en agosto de este año y en 12 meses deberá presentar el texto de la nueva constitución para ser sometida a referéndum,
- d) fuerte aumento de la participación en cargos clave del gobierno de personas provenientes de movimientos indígenas, Confederaciones Nacionales e intelectuales,
- e) nacionalización de sectores estratégicos, fundamentalmente los hidrocarburos,
- f) juicios de responsabilidades en contratos hidrocarburíferos contra todos los ex presidentes desde Jaime Paz Zamora (1989-1993) hasta Eduardo Rodríguez (2005),
- g) establecimiento de educación bilingüe (lengua indígena materna y español),
- h) toma de posesión de las ruinas de Tiwanaku, centro arqueológico que representa la capital de uno de los imperios más antiguos del continente, reivindicación del legado de los pueblos originarios.

Las sesiones de la Asamblea Constituyente comenzaron, en agosto 2006, con un temario de cambios fundamentales en relación al rol del Estado, los derechos de propiedad y la tenencia de la tierra. Sin embargo, la discusión sobre la forma de votación de las propuestas de reforma constitucional quedó bloqueada por la iniciativa del oficialismo de que los nuevos artículos de la futura Constitución se aprobaran por mayoría absoluta, cuando el reglamento de la Asamblea y la propia Constitución vigente requieren dos tercios de votos a favor. A fines de noviembre, el MAS impulsó la aprobación por mayoría del proyecto de reforma constitucional que impulsa el Poder Ejecutivo. Por su parte, los gobernadores opositores de las provincias de Beni, Pando, Tarija y Santa Cruz, anunciaron medidas unilaterales en defensa de sus derechos a la autonomía aprobada en el referéndum de julio pasado.

En esta nueva relación de fuerzas, al contrario de lo acaecido años atrás, son los partidarios del conservadorismo regional y las fuerzas de derecha los que ganan las calles para reivindicar sus prerrogativas. Un anticipo de la escalada conflictiva es la

decisión de seis gobernadores o prefectos (de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija, Cochabamba y La Paz), de romper todo diálogo con el presidente Morales y el Poder Ejecutivo Nacional. Esas jurisdicciones concentran casi el 80% de la población, mientras que el resto reside en las provincias de Oruro, Chuquisaca y Potosí, donde los prefectos son del MAS o de partidos aliados. Un elemento adicional conflictivo es la intención del Poder Ejecutivo de recortar el poder de los prefectos (gobernadores), lo que exacerbó la pelea con la oposición ante lo que se entendió como parte de una escalada del Poder Ejecutivo a efectos de implantar su proyecto de reforma agraria.

Los movimientos sociales

Desde el año 2000, Bolivia viene experimentando el creciente protagonismo de los movimientos sociales, un ascenso que es correlativo al derrumbe de los partidos y movimientos que dominaron la política boliviana del último medio siglo, sin contar la recurrente irrupción de las fuerzas armadas en la misma. Estos nuevos y decisivos actores colectivos son también la consecuencia de un proceso de democratización que, desde su origen en 1982, ha significado un avance político de la ciudadanía frente a condiciones de injusticia y exclusión social. La fuerte contradicción entre ambas tendencias —inclusividad política, exclusión social y económica— provocó sucesivos estallidos que tuvieron como momentos más críticos la llamada “guerra del agua” en Cochabamba, en abril de 2000, seguida de bloqueos de rutas y caminos por parte de organizaciones campesinas e indígenas.

En el 2003 la serie de enfrentamientos físicos entre campesinos y mineros y fuerzas policiales y militares registró un aumento de frecuencia y virulencia que desembocó en caídas de gobiernos y situaciones de cuasi-anarquía. Ese conflicto social, como bien lo marcó el actual vicepresidente Alvaro García Linera al asumir, es no sólo un conflicto distributivo convencional, sino también un conflicto racial exacerbado, y hasta el presente irresuelto. Igualmente, los motivos para la conflictividad social son múltiples:

- a) desigual distribución de la renta y de la riqueza,
- b) asociación de la propiedad de recursos con grupos étnicos,
- c) la presión de los Estados Unidos para lograr la declaratoria de ilegalidad del cultivo de coca, frente a la postura del actual gobierno de legalizarlo,

- d) los reclamos por autonomías con base étnica, y no según la división política del país.

Este escenario se agravó por dos razones fundamentales. Una, el aumento del desempleo resultante de las privatizaciones, y los shocks adversos que afectaron a dos de los socios comerciales principales, Brasil y fundamentalmente Argentina entre 1998 y 2001. La otra, por la caída de la relevancia del estaño en las exportaciones del país, que generó desempleo, y una resistencia y reestructuración de los movimientos indígenas hasta constituir una oposición política organizada.

Durante los años '90 estos factores dieron lugar a un retroceso de la hasta entonces combativa COB, y la pérdida de credibilidad en los movimientos de izquierda. A esto ha contribuido la relativa permanencia de Santa Cruz de la Sierra como polo de desarrollo, beneficiado por la expansión de las explotaciones forestales y el aumento de la superficie dedicada a la ganadería, y al cultivo de caña de azúcar y soja. En el caso de los mineros que perdían su empleo quedaron frente a tres caminos: ocuparse en actividades informales (como ha sido el caso de mineros de El Alto, que en su mayor parte emigraron a La Paz), emigrar a Argentina, o dedicarse al cultivo de coca, como se ha observado en la zona de Chapare (Cochabamba).

El ascenso de Evo Morales al poder es la consecuencia de ese movimiento de reacción generalizada frente a siglos de discriminación racial hacia los 34 pueblos indígenas bolivianos por parte de las oligarquías de raza blanca. Debe tenerse en cuenta que el MAS no responde a los cánones clásicos de un partido político o coalición de partidos sino que se trata más bien de un archipiélago de movimientos sociales y sindicales con ritmos, culturas políticas y objetivos no siempre coincidentes ni fáciles de articular y con fronteras ideológicas más amplias y pragmáticas. Como señala Félix Patzi, ministro de Educación del gobierno de Morales, no son partidos que se insertan en un movimiento social para articularse con él, como ocurría en el pasado, sino que surgen de él, en un proceso de expansión desde el campo a la ciudad.²

En dicha confluencia participan distintos movimientos

- a) Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia (CSCB, cuya base es el de los productores de coca de Cochabamba), germen del actual Movimiento al Socialismo-IPSP (Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos) creado por Morales en 1999.

- b) Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB, de base agraria y sindical, integrada en su casi totalidad por indígenas quechuas y aymaras), una escisión reciente es el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyo (CONAMAQ), que reclama la restauración de la reforma agraria de 1952 y el otorgamiento de derechos a tierras bajo el régimen de ayllus y markas contemplado en dicha reforma. También reivindican el derechos a los “usos y costumbres” como base para instituciones propias de quechuas y aymaras. Se destaca en esta línea más radical el liderazgo de Felipe Quispe, enfrentado a Evo Morales.

- c) Federación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia-Bartolina Sisa (FNMCIQB-BS), inspirado en una protagonista de levantamientos indígenas contra los españoles, es de alto predicamento en el país y está asociada a movimientos internacionales, como Vía Campesina,

- d) Confederación de los Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) reivindicatoria de los derechos de los indígenas a su tierra y su territorio, y no de planteamientos distributivos o de clase. Se encuentra activa en siete de los nueve departamentos del país.

También se cuenta la presencia de ONGs y fundaciones de creciente protagonismo durante las movilizaciones sociales y crisis institucionales de los últimos tres años, la Federación de Juntas Vecinales, (FEJUVE), en la ciudad de El Alto, y otras organizaciones con origen histórico en los movimientos de guerra de guerrillas como el Movimiento Revolucionario Tupac Katari y el Ejército de Liberación Nacional.

Esta mirada de organizaciones y grupos comparten actualmente el escenario con los partidos políticos tradicionales, que han sufrido un notorio retroceso pero mantienen sus aparatos y ocupan bancas parlamentarias y algunas alcaldías: el MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria, socialdemócrata), el MNR (Movimiento Nacional Revolucionario) y Nueva Fuerza Republicana (NFR). De todos modos, el mapa político tiende a configurarse según la nueva matriz surgida de las últimas elecciones: el MAS, como coalición de gobierno; PODEMOS, principal fuerza de centro-derecha, el centrista-conservador Unión Nacional y el histórico Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), hoy notablemente reducido .

La renegociación de los contratos petroleros

La nacionalización de los hidrocarburos tuvo un alto impacto y generó una situación de tensión con las petroleras extranjeras que, sin embargo, fue exitosamente manejada por el Gobierno. En marzo de 2006, la detención de los principales ejecutivos de Repsol-YPF en Bolivia, el español Julio Gavito y el argentino Pedro Sánchez, acusados de maniobras de contrabando, anticipaba una pulseada de intereses de imprevisibles consecuencias.

En abril de 2005 el diputado del Movimiento al Socialismo, Jorge Alvarado anunció una investigación de las exportaciones de combustibles por presunto contrabando. En noviembre de 2005 la Aduana boliviana envió a Andina, filial local de Repsol-YPF, el informe preliminar con indicios de dicho delito. Ante el descargo de Andina, le concedió en enero de este año un plazo de veinte días para los descargos definitivos. A fines de ese mes el presidente Evo Morales designó a Alvarado presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB), y en febrero de 2006 la Aduana Nacional de Bolivia formalizó la demanda contra Gavito. En marzo de 2006, Gavito y Sánchez fueron detenidos y luego liberados. A fines de abril, la Fiscalía secuestró equipos de un campo petrolífero de Repsol YPF por supuesto contrabando.

El 1º de mayo de este año el presidente Evo Morales firmó el Decreto Supremo —denominado “Héroes del Chaco” en referencia a la guerra contra Paraguay (1932-1935)— que nacionalizó y dió al Estado “la propiedad, la posesión y el control total y absoluto” del gas y el petróleo y ordenó a las Fuerzas Armadas la toma de posesión de las plantas y campos petrolíferos. Posteriormente, el gobierno anunció que expropiaría las acciones de Repsol si no llega a un acuerdo con la firma hispano-argentina y mientras la cancillería española envía una delegación para discutir el tema con el gobierno boliviano, este envió el Ejército para ocupar las instalaciones de hidrocarburos en el país, nombró directores para la conducción de cinco petroleras, y rechazó el plazo de 45 días propuesto por Petrobrás para lograr un acuerdo antes de ir a un arbitraje internacional. A su vez, mientras las negociaciones con Repsol parecían encaminarse, en octubre pasado se registraron protestas de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG): los indios guaraníes reclaman una indemnización de U\$S 44 millones por daños ambientales. Aparentemente había ya un preacuerdo por un pago de U\$S 14,5 millones.

Con relación a las ventas de gas a la Argentina, los presidentes Morales y Kirchner acordaron en

junio de 2006 que estas gozarán de un incremento del 47% (de un precio base de U\$S 3,40 a U\$S 5/millón de BTU³), y un aumento de la provisión de 7,7 a 27,7 millones de metros cúbicos diarios. Argentina ha acordado la compra de hasta 7,7 millones de metros cúbicos diarios de gas a Bolivia, si bien su nivel promedio ronda los 4,5 millones, y el país del Altiplano parece encontrar restricciones físicas para satisfacer la creciente demanda de Argentina. Una cláusula clave de dicho acuerdo es que Argentina no reexportará gas boliviano a Chile. Este acuerdo, con vigencia inicial hasta diciembre de 2006, se refrendó el 19 de octubre en uno nuevo “de asociación estratégica en materia de hidrocarburos”, firmado en Santa Cruz de la Sierra por los presidentes Morales y Kirchner, que comenzará a regir el 1º de enero de 2007 y tendrá vigencia por 20 años.

Dado que el acuerdo implica la cuadruplicación de los niveles actuales de ventas a la Argentina, hay serias dudas sobre la capacidad de la infraestructura boliviana de cumplir con dichos acuerdos en caso de que no se desacelere la demanda argentina de gas natural. Funcionarios bolivianos han admitido que requieren inversiones extranjeras de al menos U\$S 800 millones para cumplir con los compromisos firmados.

Simultáneamente, el gobierno de Evo Morales ha venido renegociando los contratos con concesionarios privados. Dichos acuerdos establecen, en general, que deben abonar al gobierno boliviano sobre el 82% del valor de producción un 50% en concepto de regalías, pero no hay indicaciones precisas respecto de inversiones. Mientras el Congreso iniciaba el análisis de los 44 contratos entre YPF y las operadoras extranjeras para su evaluación y aprobación o rechazo⁴, este proceso recibió denuncias de corrupción por parte de legisladores del frente derechista Poder Democrático y Social (PODEMOS) y de la centrista Unidad Nacional (UN) que estaban en condiciones de bloquear la aprobación en el Senado: el MAS cuenta con 72 de los 130 diputados, pero en el Senado posee 12 legisladores, frente a 13 senadores de PODEMOS, uno del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y uno de la UN.

Las denuncias fueron acompañadas por un pedido de censura contra el ministro del área, el historiador y periodista Andrés Soliz Rada, que tras fuertes cruces, finalmente, renunció el pasado 15 de septiembre al igual que Jorge Alvarado, desplazado de la conducción de YPF. Pocas semanas después, el presidente Morales pierde a otro integrante de su gabinete, el ministro de Minas, Walter Villarreal, removido tras violentos enfrentamientos entre

trabajadores que se disputan una mina de estaño, a 230 kilómetros de La Paz, y lo reemplaza por otro dirigente sindical del sector, Guillermo Dalence.

Situación actual y escenarios alternativos

La demanda externa a satisfacer es de 45,2 millones de m³ diarios, pero ya con 41,1 millones la producción llegó a la utilización plena límite de la capacidad instalada de almacenamiento y transporte. Esto refleja la insuficiencia de inversión y de infraestructura para cumplir en tiempo y forma con los compromisos con el exterior. En el caso argentino, pareciera que la provisión de gas boliviano exigiría inversiones en Bolivia por parte de la firma argentina ENARSA de unos U\$S 3.000 millones. Una inversión crítica es la de montar una planta separadora de gases, pero observadores bolivianos y extranjeros coinciden que no es factible en el corto plazo pues su costo es de U\$S 1.200 millones, mientras que el presupuesto anual de la firma estatal argentina, es inferior a los U\$S 130 millones. La venezolana, PDVSA, en cambio, aportó U\$S 130 millones para una sociedad mixta venezolano-boliviana para instalar una fábrica separadora de gases en Río Grande, en el Oriente boliviano.

Brasil, a su vez, acordó hace diez años la importación de hasta 30 millones de m³ diarios de gas hasta el año 2019. El gobierno brasileño, que actualmente está comprando en promedio 12 millones de metros cúbicos, viene exigiendo la aplicación de la fórmula polinómica en el acuerdo firmado hasta 2019, descartando el reclamo boliviano de un aumento de los U\$S 4.3 actuales a U\$S 5 por millón de BTU como el que le cobra a la Argentina, una indemnización por la ocupación de sus refineras y la preservación de las propiedades de Petrobrás sobre sus refineras. Si bien Petrobras había resuelto suspender transitoriamente las inversiones en exploración y explotación de petróleo en Bolivia, para el período 2007-2011 tiene previsto invertir U\$S 22.100 millones para elevar la oferta disponible hasta U\$S 70 millones diarios hacia el año 2010. El nuevo acuerdo tendrá vigencia por treinta años, mantiene la propiedad de YPF sobre los recursos hidrocarbúricos, y para Petrobrás la gestión en los siguientes rubros:

- extracción en la zona de la franja de Tarija (San Alberto, San Antonio y Colpa-Caranda),
- exploración en áreas más hacia el norte (Ingre, Irenda y Bloques de Río Hondo),
- operación del gasoducto Yacuiba-Río Grande,
- mantenimiento de la propiedad de Petrobrás sobre 2 refineras, 103 estaciones de servicio y la licencia para introducir combustibles de marca Lubrax en el mercado boliviano,
- al cabo de los 30 años del contrato, los activos de Petrobrás en Bolivia pasarían a ser propiedad de YPF,
- el 50% de la facturación promedio anual de ventas es transferido al Estado Boliviano, el resto, será aplicado por Petrobrás para atender gastos corrientes, y eventualmente el crecimiento económico.

Este acuerdo es relevante para ambas partes. Para Bolivia, porque otorga un respaldo contractual-legal a un compromiso de exportaciones por tres décadas. Para Brasil, porque se asegura el abastecimiento de un país que es el proveedor del 50% del gas consumido por ese país.

Propiedad de la tierra, reforma agraria y conflictividad social

La decisión de asegurar la igualdad social possibilitando el acceso a la tenencia y propiedad de la tierra apunta a satisfacer las demandas de los movimientos campesinos e indígenas que ungieron a Evo Morales como líder político y lo acompañaron en su campaña electoral. El MAS se ha comprometido a una reforma agraria a efectos de asegurar a indígenas y pequeños campesinos la propiedad, vía expropiación de latifundios, sobre unos 20 millones de hectáreas.

La cuestión agraria presenta al Gobierno, defensor de los intereses y demandas indígenas, enfrentado con un grupo de familias terratenientes con base en Santa Cruz de la Sierra, Pando y Beni. Las mismas son no sólo fuerte defensoras de políticas (y políticos) de ideología conservadora, sino también de reclamos de mucha mayor autonomía frente al gobierno central que la que se viene discutiendo en otros planos.

El proyecto oficial apunta a expropiar tierras que luego de evaluaciones bi-anales se comprobara que carecen de uso concreto, no cumpliendo con ciertas funciones productivas, económicas o “sociales”. Los empresarios exigían evaluaciones cada cinco años y los campesinos cada seis meses. Esta reforma agraria fue aprobada en Diputados pero encontró inicialmente una fuerte resistencia en el Senado, en el que la oposición ejerció su capacidad de veto. El frente derechista PODEMOS, liderado por el ex presidente Jorge “Tuto” Quiro-

ga (2001-2002), recibió la explícita advertencia de Evo Morales de apelar a la movilización popular hasta que se aprobara la reforma.

Frente a marchas campesinas que se reanudaron en varios puntos del país, los senadores de PO-DEMOS manifestaron públicamente su rechazo a toda coerción por parte del gobierno central. La respuesta se fundamenta en la percepción de que el endurecimiento de Evo Morales responde a dificultades para satisfacer prontamente las demandas de los movimientos indígenas. Estas mostraron un creciente debate interno y signos de impaciencia por la demora del gobierno en avanzar en los cambios profundos prometidos.

Lo cierto es que con el abandono del Senado por parte de la oposición, el Gobierno no podía avanzar en el tratamiento de los contratos firmados entre el Gobierno y las empresas petroleras, en la aprobación de préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 20 millones de dólares y otro por 23 millones de dólares y en la modificación de la legislación agraria. El mandatario respondió denunciando la existencia de “un golpe institucional” y acusando a la oposición de sostener una actitud de “defensa del latifundio improductivo y de oposición a un proceso de cambio democrático”. Cabe recordar otra frase del presidente al inaugurar la Asamblea Constituyente, el 6/8: “*Estamos ante la refundación de Bolivia y estamos obligados a entendernos*”.

Finalmente, el 28 de noviembre, el Gobierno logra volcar en su favor la mayoría en el Senado, con el apoyo de tres senadores opositores suplentes y en una corta sesión se aprueba la controvertida ley de reforma agraria junto con la ratificación de los contratos petroleros. El frente de conflicto se desplaza de inmediato del Congreso al plano territorial: el 1º de diciembre, un paro de 24 horas convocado por líderes cívicos regionales para exigir el respeto por los dos tercios en la Asamblea Constituyente vuelve a dividir en dos al país aunque tiene un cumplimiento parcial.

La falta de cuadros políticos, administrativos y técnicos con experiencia de gestión es otro de los puntos vulnerables del gobierno socialista boliviano. Esta carencia fue suplida por el presidente Morales con la permanente presencia contemporizadora del vicepresidente Alvaro García Linera en instancias delicadas de negociación, la exposición pública de las posiciones oficiales ante la opinión pública doméstica y el frente externo, y con la conformación de un equipo especial reforzado por los ministros de Hacienda, Planificación, Defensa y de la Presidencia. Por otra parte, Morales y García Linera encararon una intensa agenda de viajes al exterior,

que puede considerarse también como presentación en sociedad ante el mundo de la “revolución pacífica” que buscan encarnar y, a la vez, una diplomacia activa, de diversificación en las relaciones exteriores y en la visión de un escenario internacional multipolar (giras europeas, China, Africa).

En varios sentidos, desde el inicio de su campaña electoral, Evo Morales se manifestó a favor de una fuerte ruptura con el pasado. Ello incluye reducir el grado de influencia de los Estados Unidos, cuyo gobierno es percibido como uno de los principales enemigos del pueblo boliviano, principalmente debido a su papel en la erradicación forzada de los cultivos de coca. Esto subsiste en la política de alianzas, dado que el gobierno de Bolivia sigue apostando fuertemente a la relación especial que mantiene con el gobierno de Venezuela, lo que alimenta las retóricas y lógicas de la confrontación y las prevenciones de los sectores nacionalistas en Bolivia y en países vecinos (Chile y Perú).

Muestra de ello fue la repercusión que tuvo el convenio de cooperación militar firmado con Venezuela, el que según algunos trascendidos divulgados por la prensa chilena podría incluir la instalación de bases militares en zonas fronterizas. El acuerdo contempla “mejorar y complementar las capacidades de defensa de cada país”, organización de fuerzas armadas, gestión de crisis y “desarme y control de armas”. Esto ha generado preocupación principalmente en Chile, ante la instalación de la mayor parte de esas bases en la frontera chileno-boliviana (desmentida por el ministro de Defensa boliviano), y declaraciones desfavorables de la Secretaria de Estado Condoleezza Rice, y del embajador de EEUU, Patrick Goldberg sobre la nacionalización de hidrocarburos. En este punto, el gobierno de Evo Morales cuenta con ventajas apreciables respecto de todos sus antecesores:

- los dos principales factores de desestabilización del pasado —las Fuerzas Armadas y los EE.UU.— carecen de influencia decisiva en el actual panorama. Los militares, por otra parte, han encontrado un reconocimiento especial por parte del presidente Morales, como un actor institucional de peso tanto en el proceso de nacionalización de los hidrocarburos como frente a las presiones autonomistas y el renovado impulso del reclamo de salida al mar.
- el tercer factor de inestabilidad —los movimientos sindicales, campesinos e indígenas— tienen, ahora y por primera vez, un gobierno que los representa. El capital simbólico de prestigio que ejerce el liderazgo presidencial es, en este caso, una herramienta fundamental.

En estas condiciones, sin embargo, el gobierno del MAS no puede escapar de las condiciones estructurales y condicionamientos políticos y sociales para gobernar: no puede satisfacer todas las demandas existentes sin pagar costos y no puede hacerlo manteniendo simultáneamente abiertos los distintos frentes de conflicto, el político-institucional, el económico y el social, que están, por otra parte, visiblemente interconectados. Todos ellos, sumados, cualquiera fuera el motivo disparador, pueden llevar a Bolivia a las escaladas y situaciones de ingobernabilidad tantas veces vividas en el pasado.

Perspectivas

Relación Gobierno-empresas de hidrocarburos: se alcanza una renegociación de contratos sin roces mayores con Petrobrás y demás firmas extranjeras. Estos temas quedan definidos antes de fin de año. Al ser refrendados por el Congreso, el Gobierno logra una importante victoria que le permitirá percibir más de 2000 millones de US\$ anuales.

Relación Gobierno-Congreso, en La Paz: continuaría con el ambiente caldeado por las disputas en torno de la Asamblea Constituyente y el ejercicio del poder mayoritario. La implementación de la reforma agraria, luego de las marchas en su favor en La Paz, y en contra en Santa Cruz de la Sierra, preanuncia un rebrote de la conflictividad latente por la resistencia de los sectores del Oriente y de la minoría blanca a una aspiración reclamada por los movimientos indígenas. El Gobierno logra una inesperada mayoría en el Senado con el concurso de algunos votos de la oposición que se vuelcan en su favor y con ello, la aprobación de la ley agraria y los nuevos contratos petroleros.

Relación Gobierno-Asamblea Constituyente, con sede en Sucre: complicada por el desacuerdo fundamental sobre el método de votación entre oficialismo y oposición. La profundización del enfrentamiento puede derivar en una querrela de legitimidades, con la Asamblea adoptando decisiones soberanas por mayoría simple y la oposición desconociendo su validez y retirando su participación. La Corte Suprema sería, en tal caso, nuevamente un actor protagónico del conflicto político-institucional, sometida a fuertes presiones.

Relación Gobierno central-gobiernos provinciales, con epicentros en La Paz y Santa Cruz de la Sierra: altamente conflictiva por la reforma agraria. Tanto el tema de la reforma constitucional como la reforma agraria terminan siendo zanjados por el Ejecutivo forzando decisiones del Legislativo. No

se descartaría la apelación presidencial a Decretos Supremos de necesidad y urgencia en un clima de creciente movilización social y una exposición que puede desgastar al presidente Morales. La figura del vicepresidente Alvaro García Linera cumple un papel clave en este proceso.

Ubicación en el contexto regional: Existen frentes de conflicto y erosión diplomática con los EE.UU., que están condicionados por el grado de acercamiento del gobierno boliviano con el gobierno venezolano de Hugo Chávez. Brasil y Argentina, son principales soportes de acompañamiento regional para el gobierno boliviano. Y existe un equilibrio distante con Chile y Perú que puede derivar en episódicas tensiones, alentadas por factores de la política doméstica de los tres países. A los ojos europeos y de sectores influyentes latinoamericanos y estadounidenses, el gobierno de Evo Morales se verá obligado a optar entre una vía de mayor pragmatismo y perfil socialdemócrata o una vía populista, de profundización y radicalización de la ruptura con lo que considera el “viejo régimen”, que lo llevará, en tal caso, a seguir el camino del modelo “chavista” venezolano y mantener o incrementar escenarios de confrontación interna y externa.

Notas

1. Ver Roberto Kozulj, “Integración gasífera latinoamericana. Una prospectiva cargada de incertidumbres”, en Nueva Sociedad, n°2004, Julio-Agosto 2006, Bs.As.
2. Stefanoni, Pablo y Hervé Do Alto, “La revolución de Evo Morales. De la coca al palacio”, Ediciones Claves para Todos, Ed. Capital Intelectual, Buenos Aires, 2006. P.13
3. BTU: British Thermal Units, es una unidad de medida de gas natural. Observadores extranjeros han conjeturado que el precio base probablemente se irá ajustando conforme a una fórmula polinómica análoga al del contrato de Bolivia con Brasil.
4. Las empresas son Repsol YPF, British Petroleum, Total, Estate Petrol S.A., Petróleos de Venezuela (PDVSA), Petrobrás Bolivia, Vintage Petroleum, Matpetrol, Pluspetrol, Dong Nong, Canadian, Chaco, British Gas y Andina S.A.

Fabián Bosoer, Licenciado en Ciencias Políticas (Universidad del Salvador, 1986), Master en Relaciones Internacionales (FLACSO, 2002). Es profesor de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Belgrano. Ha sido consultor del PNUD y colaborador del Informe “La democracia en América Latina” (PRODDAL, 2004). Analista político y periodista, se desempeña como editorialista del Diario Clarín. Su último libro es “*Generales y embajadores. Una historia de las diplomacias paralelas en la Argentina*” (Vergara, 2005).

Héctor Rubini, Licenciado en Economía (Universidad Nacional de Rosario, 1991). Es consultor en temas de economía y finanzas, y docente en la Universidad Argentina de la Empresa y en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Se ha desempeñado en el sector público y privado, también ha publicado trabajos sobre macroeconomía teórica y aplicada. Ha completado una maestría en Economía (Instituto Torcuato Di Tella, 1993) y en Finanzas (Universidad del CEMA, 1995). Actualmente está elaborando su tesis para el Doctorado en Economía por la Universidad de San Andrés.

Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES)

Lavalle 1619 Piso 9º Ofic. A (1048) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Argentina Tel./Fax (54 11) 43 72 83 51
e-mail: info@cries.org - www.cries.org